

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Sebastián Guerra Valencia
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 03 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 003 2021 00005 02
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 184 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobrevivientes - NO requisitos Ley 797, tampoco Ley 100, ni supera test Constitucional para condición más beneficiosa Acuerdo 049 de 1990
DECISIÓN	Confirma absolución

Hoy, **veintiséis de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento en grado jurisdiccional de consulta a favor de **Sebastián Guerra Valencia**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso que promoviera en contra de **Colpensiones**. Radicado único nacional 05001 3105 **003 2021 00005** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº.23**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Para contextualizar lo ocurrido procesalmente se tiene que, **Gloria Patricia Valencia Restrepo** y **Sebastián Guerra Valencia** promovieron esta acción con el fin de obtener el reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente, por la muerte de su cónyuge y padre, en su orden, señor **Tomás Manuel Guerra Villadiego**, en aplicación del principio de la condición mas beneficiosa, esto es, conforme a las reglas del Decreto 758 de 1990 y sentencia SU 005 de 2018, con mesadas retroactivas causadas desde el 07 de enero de 2006, incluidas las adicionales de junio y diciembre; reclaman también intereses moratorios, art. 141 de la Ley 100 de 1993, costas y agencias en derecho.

En sustento de ello se afirma que, los señores Gloria Patricia Valencia y Tomas Manuel Guerra contrajeron matrimonio católico el 08 de febrero de 1992, con convivencia por espacio de 13 años, 10 meses y 26 días, hasta el 07 de enero de 2006 cuando falleció el señor Guerra, unión en la que procrearon a **Sebastián Guerra Valencia**, quien para tal calenda tenia 3 años de edad. Para la data del óbito el señor Tomás Manuel ostentaba la calidad de afiliado al ISS, con cobertura para los riesgos de IVM, y un total de **754 semanas aportadas, pero no alcanzó 50 en los tres años anteriores y tampoco 26 en el ultimo año previo al deceso**, no obstante, al 1º de abril de 1994 registra **321**. El 25 de mayo de 2006 Gloria Patricia radicó ante el Seguro Social solicitud de reconocimiento y pago de pensión en su favor y de su hijo, negada en Resolución 019217 del 29 de agosto del mismo año, por contar el afiliado solo con 28 semanas en los 3 años anteriores, no superando el supuesto del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, otorgándoseles indemnización sustitutiva en cuantía única de \$4.268.047 para cada uno.

El 28 de noviembre de 2006 la señora Gloria Patricia radicó proceso ordinario pretendiendo el otorgamiento de la prestación, en aplicación del

principio de la condición mas beneficiosa, asunto que correspondió al Juzgado Quinto laboral del Circuito, despacho que el 04 de julio de 2008 dictó sentencia condenatoria, recurrida en apelación por el ISS, revocada por la Sala Laboral de esta Corporación el 28 de agosto de 2009, interponiéndose por la actora recurso de casación, decidido en forma adversa en proveído del 28 de agosto de 2012.

Agrega que la pareja se separó pasajeraamente por razones de trabajo del fallecido en el municipio de Planeta Rica Córdoba, localidad donde se desempeñó como mototaxista, luego de su desvinculación de la Cooperativa Recuperar, y con los ingresos de tal actividad velaba por el sostenimiento de su hogar, sin que le fuera posible nueva vinculación laboral, razón por la que cesaron los aportes a pensión, precisando que viajaba frecuentemente a Medellín a estar al lado de su cónyuge y su hijo y en ocasiones estos iban a visitarlo.

Que en vida del causante la señora Gloria no tuvo empleo formal, razón por la que su manutención y la de su hijo estuvo siempre a cargo del señor Guerra Villadiego, sin que este tuviera convivencia con otra mujer. Anota que la señora Gloria Patricia es madre de otro menor de 12 años que responde al nombre de Cristian Cardona Valencia, mientras que el occiso no tuvo mas hijos reconocidos, por reconocer o de crianza. Que la señora Gloria Patricia es mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, de lo que constituye plena prueba la ficha de SISBEN con puntaje de 19,91; no es autónoma económicamente, por no disponer de empleo constante, recibiendo la suma de \$50.000 semanales por aseos en casas de familia, sin prestaciones, ingresos escasos que no le permiten la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus hijos.

Puntualiza que el 07 de junio de 2019, obrando en nombre propio y en representación de Sebastián, para entonces menor, pidió a Colpensiones el otorgamiento de la pensión de sobreviviente causada por el deceso de **Tomas Manuel Guerra Villadiego** bajo los supuestos de la condición mas beneficiosa (sentencia Su 005 de 2018), decidiéndose negativamente en acto administrativo SUB215714 del 12 de agosto del mismo año, interponiendo los recursos de reposición y en subsidio apelación, despachados de manera desfavorable, quedando así agotada la reclamación administrativa.

Finalmente estima que no se configura el fenómeno de **cosa juzgada material**, en atención a los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a la condición mas beneficiosa para pensión de sobrevivientes, vertidos en sentencia SU 005 de 2018, lo que deriva en el rompimiento del requisito de identidad de causa para pedir.

Subsanados los defectos advertidos por el Juzgado de conocimiento, en auto del 27 de abril de 2021, **se admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Enterada de la actuación la entidad convocada por pasiva allegó contestación así:

De los hechos tiene como ciertos, el vinculo matrimonial de la señora Gloria Patricia con el fallecido, la procreación de Sebastián Guerra Valencia, la afiliación del señor Tomás Manuel al RPM cotizando un total de 761 semanas, sin alcanzar 50 en los tres años anteriores al deceso, ni 26 en el último año; la reclamación administrativa de pensión efectuada por la señora Gloria, con respuesta negativa, otorgándose indemnización sustitutiva en la suma indicada, el trámite de proceso ordinario laboral por la señora Gloria, las sentencias de primera, segunda instancia y la dictada con ocasión del recurso de casación; también es cierto, pues aparece

demostrado con prueba idónea que la señora Gloria es madre del menor Cristian Cardona Valencia. Admite la presentación de nueva reclamación el 07 de junio de 2019, las resoluciones emitidas con ocasión de ello y de los recursos interpuestos y con ello el agotamiento de la reclamación administrativa. Los demás supuestos no le constan, razón por la que los somete a prueba. **Resistió** las pretensiones y formuló como **excepciones previa**, la de cosa juzgada, al estructurarse los elementos previstos por el artículo 303 del C.G. del P., toda vez que existe sentencia ejecutoriada en proceso previo con idénticos objeto, causa y partes; y de **mérito** las de: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes por ausencia de uno de los requisitos legales para ello; imposibilidad de aplicar el precedente judicial y la inversión de la carga de la prueba, inexistencia de pago de intereses moratorios art. 141 Ley 100 de 1993, prescripción, innominada, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y la genérica.

En la etapa pertinente de la audiencia regulada en el artículo 77 del C. P. T. y de la S.S., **se declaró configurado el medio exceptivo de cosa juzgada**, y en consecuencia se dispuso el archivo del expediente, con condena en costas a la parte actora. Argumentó el a quo con los documentos allegados quedó establecida la identidad de causa, objeto y partes, y precisamente en la sentencia emitida por esta Sala de Laboral de este Tribunal en el año 2009, **se revocó la pensión de sobrevivientes otorgada en primera instancia**, absolviéndose al ISS hoy Colpensiones, al ser inviable el salto normativo de Ley 797 de 2003 al Acuerdo 049 de 1990 para el acatamiento de la condición mas beneficiosa, proveído que dejó en firme la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, tornándose así inmodificable, al no apreciarse hechos nuevos, sin que la tesis jurisprudencial actual de la Corte Constitucional desdibuje la existencia del fenómeno jurídico examinado.

Tal veredicto fue revocado parcialmente por esta misma Sala en auto del 10 de marzo de 2022, al evidenciarse la identidad de causa, objeto y partes, respecto de la señora **Gloria Patricia Valencia Restrepo** y de **Colpensiones, más no así** frente a **Sebastián Guerra Valencia, toda vez que este no fue incluido en el proceso anterior**, pues aunque se efectuó reclamación administrativa a su nombre, fue excluido del trámite judicial, sin que los cambios jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional, Suprema de Justicia o Consejo de Estado se traduzcan en un nuevo hecho o causa para las litis ya resueltas, ni sea posible entender que los casos definidos con base en criterio anterior puedan ventilarse nuevamente ante la justicia ordinaria pues, *la triada identitaria: partes, objeto y causa, no se altera por virtud de dicho cambio jurisprudencial como si por ello se hubiera transformado el mundo fáctico del derecho ya discutido y resuelto judicialmente*, planteamiento que se mantiene vigente en el órgano de cierre de esta especialidad, como se lee, entre otras, en sentencia SL688-2023. **Luego al trámite se dio continuidad únicamente con Sebastián Guerra Valencia** como demandante.

La primera instancia culminó con **sentencia** proferida el 21 de marzo del año que corre, en la que se declaró prospera la **excepción de inexistencia de la obligación de reconocer, liquidar y pagar pensión de sobreviviente** al joven **Guerra Valencia, por** el fallecimiento de su padre Tomás Manuel Guerra Villadiego, pues este no dejó causada tal prestación. Como consecuencia, **absolvió** a **Colpensiones** de las pretensiones, le impuso costas procesales al demandante.

Al no interponerse recurso de apelación y ser la decisión adversa a los intereses del reclamante, se conoce de la misma en grado jurisdiccional de consulta.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **la apoderada judicial de Colpensiones**, solicitando la confirmación del pronunciamiento revisado, toda vez que la norma a observar para definir el derecho reclamado es la Ley 797 de 2003, al producirse el deceso del afiliado el **07 de enero de 2006**, sin que supere las 50 semanas exigidas para causar la pensión de sobrevivencia, y tampoco las 26 en el ultimo año previstas por el texto original de la Ley 100 de 1993, y sin que sea posible acoger el Decreto 758 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990. Insiste en la improcedencia de intereses moratorios e igualmente de la indexación.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados y que se tornan relevantes para la definir el asunto se tienen: La fecha de nacimiento del joven **Tomás Guerra Valencia**, 08 de octubre de 2002, su vínculo filial en calidad de hijo con el señor **Guerra Villadiego Tomas Manuel**, quien falleció el **07 de enero de 2006**. La solicitud de pensión de sobrevivientes elevada por la señora **Gloria Valencia Restrepo** en calidad de cónyuge y en representación de su hijo menor Sebastián, con fecha 25 de marzo de 2006, negada con Resolución 019217 del 29 de agosto del mismo año, concediéndose la prestación subsidiaria de indemnización sustitutiva en suma única de \$4.268.047 para cada uno; con nueva reclamación de pensión radicada ante Colpensiones el 07 de junio de 2019, decidida adversamente en acto administrativo SUB215714 del 12 de agosto siguiente, pues aunque el occiso efectuó aportes por un total de 5.271 días, equivalentes a **753 semanas, no superó 50 en los tres** años anteriores al óbito, en los términos de la Ley 797 de 2003, en cuya vigencia se produjo el deceso y tampoco **26 en el último año**, para dar paso a la

acogida de la condición más beneficiosa bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, interponiéndose por los interesados los recursos de reposición y apelación, con pronunciamiento adverso en Resoluciones SUB305917 del 07 de noviembre de 2019 y DEP15353 del 26 de diciembre del mismo año. También obra historia laboral, actualizada a **10 de junio de 2021**, en la que se reflejan aportes **interrumpidos** por parte del señor **Guerra Villadiego** entre el **01 de agosto de 1988 y el 31 de julio de 2003**, por un total de **761,86 semanas, 300 al 1º de abril de 1994**.

Planteadas así las cosas, y teniendo en cuenta lo argumentado por la parte actora, el **problema jurídico** gira en torno a establecer si el señor **Tomás Manuel Guerra Villadiego**, dejó acreditados los requisitos para causar pensión de sobrevivientes, en caso afirmativo, se analizará el joven **Sebastián Guerra Valencia**, supera las exigencias para ser beneficiario de tal prestación y de ser el caso, la fecha de disfrute, monto de la mesada, retroactivo causado, imposición o no de intereses moratorios o en subsidio indexación y lo atinente a la condena en costas.

Pues bien, siendo la fecha de fallecimiento del afiliado **el 07 de enero de 2006**, la norma a observar para definir el derecho pensional lo son los artículos **12 y 13 de la Ley 797 de 2003**, exigiéndose 50 semanas aportadas en los 3 años anteriores al deceso, supuesto que no se satisface, pues según historia laboral y actos administrativos el afiliado fallecido entre el ciclo enero 07 de 2003 y la misma calenda de 2006, registra **28 semanas**, el último aporte lo fue para el mes de julio de 2003.

Tampoco se superan las subreglas para la aplicación del principio de condición más beneficiosa establecidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL4650 del 2017, reiterada entre otras, en la SL4344 de 2018, SL3143 de 2018, SL3680 de 2019,

SL3295 de 2019, SL023 de 2020, SL092 de 2020, SL150 de 2020, SL4069-2020 y SL 3565-2021, en la que se decidió asunto idéntico al analizado en esta ocasión, pues el fallecimiento del afiliado ocurrió el 26 de marzo de 2003, y el del señor Guerra Villadiego, como ya se dijo, **el 07 de enero de 2006**, y si bien se está dentro del límite temporal fijado por la alta Corporación para que opere dicho principio, esto es, tres años posteriores a la expedición de la Ley 797 de 2003 - **29 de enero de 2003 y el mismo día y mes de 2006**-, aunque realizó aportes por 26 semanas en el año anterior al cambio legislativo- 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002-, **no registra aporte alguno en el año anterior al óbito, dada su calidad de afiliado inactivo para la data en que se produjo este hecho**, pues, su último aporte, se reitera, fue para el ciclo **julio de 2003**, siendo los presupuestos para la aplicación de dicho beneficio: *"i) que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando; ii) que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002; iii) que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006; iv) que al momento del deceso no estuviese cotizando; y v) que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento"*.

Y si bien, existen expectativas legítimas y bajo estas, derechos a pensión susceptibles de consolidarse, no es factible mantener abierta en el tiempo la posibilidad de ello, pues ni siquiera ocurre con el régimen de transición en que se impuso por el constituyente límite al mismo, luego, la interpretación dada por la Corte Suprema sobre la aplicación de la condición más beneficiosa frente a la norma inmediatamente anterior a Ley 797 y Ley 100, respeta la voluntad por el legislador introducida con este último estatuto, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que se ofrezcan se puedan conservar a largo plazo, al considerarse que: *"si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que puede cambiar el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos*

los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración”.

Apartándose el órgano de cierre de la Jurisdicción ordinaria laboral de los efectos inter partes y la ratio decidendi de la sentencia SU-005 de 2018, la cual, por demás, respalda la postura traída por la Sala de Casación Laboral frente al tema de la condición más beneficiosa, al considerarla acorde a la reforma introducida al sistema pensional en el AL 01 de 2005, y solo desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable, fijándose en tal proveído las subreglas a satisfacer para estar así catalogado y lograr el beneficio con salto normativo bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, teniendo como requisitos concurrentes: **1.** pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; **2.** tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; **3.** depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; **4.** al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la prestación de sobrevivientes, y **5.** la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales.

Mostrándose la jurisprudencia especializada en desacuerdo con tal test por considerar que: *"la introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema pensional y comprometer la realización de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto*

de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago”, al no tratarse de un desconocimiento del principio de la condición más beneficiosa, sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo bajo la tutela del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales, postura que fue asumida desde la sentencia SL1884 de 2020, y que se ha reiterado, entre otras, en las SL2664 de 2020, SL3314 de 2020 y SL3139 de 2020.

Y mas recientemente, en sentencia SL969-2023, se explica por el órgano de cierre de esta especialidad:

...una de las características más importantes de este principio, es que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, es decir, no puede ser usado para garantizar la perpetuidad de unas normas que estuvieron vigentes y le eran aplicables a un grupo de afiliados, pues su ámbito de actuación se orienta a conservar un régimen anterior cuando el trabajador haya cumplido una condición relevante del mismo.

Así las cosas, como bien se sabe que, desde el inicio del proceso, la censura pretendió se resolvieran sus peticiones bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, basta reiterar el criterio que esta Sala ha adoctrinado sobre la imposibilidad de tener en cuenta tal normatividad en los casos en que el causante fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003.

Y luego de rememorar sentencia CSJ SL142-2020, en la que se citó la CSJ SL039-2018, concluye:

Bajo ese contexto, y dada la inviabilidad de hacer un rastreo histórico en la búsqueda de normas pretéritas que hipotéticamente hubieran podido regular tal situación hasta hallar la que mejor se acomode a los intereses particulares del demandante, en razón de que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro, es que el litigio debe ser resuelto al compás de lo adoctrinado por la Ley 797 de 2003. Criterio reiterado en las sentencias CSJ SL1742-2021 y CSJ SL142-2020.

Así pues, no es dable acceder a las súplicas que elevó el recurrente relativas a otorgar la prestación con fundamento en los requisitos dispuestos en el Acuerdo 049 de 1990, pues ello no tiene cabida en aplicación al principio referido, menos bajo el supuesto de acudir al principio de favorabilidad que regula el artículo 53 de la Constitución Política, en tanto su mandato parte de la existencia de duda en

la aplicación o interpretación de normas vigentes, situación que desde luego no ocurre en este caso.

Tampoco son admisibles los argumentos de la censura, en cuanto considera que las Leyes 797 de 2003, 860 de 2003 y 1580 de 2012, cambiaron algunos aspectos «precisos, concretos y aislados» del sistema, lo que impide considerar que entre la Ley 100 de 1993 y estas disposiciones existió un salto normativo con la entidad para admitir que sucedieron en el tiempo al Estatuto Pensional.

Al respecto, no existe una deficiencia normativa, vacío legislativo o laguna axiomática, de cara a la disposición que prevé los requisitos para causar la pensión de sobrevivientes, regulados por el legislador. El hecho de que el régimen de prima media con prestación definida regulado por la Ley 100 de 1993, conserve características del Acuerdo 049 de 1990, emitido por el extinto ISS (CSJ SL, 23 ago. 2011, rad. 41533), no significa de ninguna manera que la Ley 797 de 2003, no puede considerarse en función de analizar el salto normativo que permite la jurisprudencia a través del principio en cita, pues se trata precisamente de la norma que en la actualidad impone los lineamientos para estudiar la procedencia de prestaciones como la que ahora llama la atención.

Conceder la pensión conforme la tesis propuesta por la censura, sería tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicación a una disposición que, de manera expresa, fue derogada.

Y en concreto frente al test de la Sentencia SU 005 de 2018 dice:

... el denominado test de procedencia no tiene por objeto reemplazar los requisitos legales que regulan la pensión de sobrevivientes, pues a más de que esa no es la función constitucional, ni legal de la jurisprudencia de las Altas Cortes, el mismo fue creado con el fin de flexibilizar el requisito de subsidiaridad de la acción de tutela como mecanismo procedimental para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media con prestación definida, como en su texto se menciona.

Al respecto, vale la pena recordar que la pensión objeto de litigio no está supeditada a que el pretenso beneficiario acredite una condición particular de vulnerabilidad, superando condiciones o reglas establecidas en un test como el de la referencia, cuyo fin, según se ha dicho, es diametralmente opuesto.

En ese contexto, esta Corporación no puede compartir argumentos de facto que creen condiciones de acceso a la pensión de sobrevivencia contra la descripción normativa, pues ello conduciría a una inequívoca tergiversación de la institución sustancial de esta prestación, pasando por alto el elaborado principio jurisprudencial, con lo que se abriría paso a una aplicación retroactiva de la ley que, a la postre, vulneraría principios de estirpe constitucional como los de igualdad y seguridad jurídica.

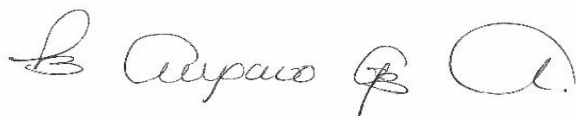
Razones por las que se impone la confirmación del fallo revisado, al acoger esta Sala de Decisión el precedente especializado, **sin que haya lugar a condena en costas por analizarse el asunto en el grado especial de consulta.**

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Sebastián Guerra Valencia**, contra **Colpensiones**.

Sin costas en esta instancia por conocerse en consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijará por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE